

EDITORIAL

EL SALVADOR 1985: PEOR QUE 1984, MEJOR QUE 1986

Los esfuerzos del gobierno norteamericano por conseguir que El Salvador goce de una imagen internacional aceptable parece haber tenido bastante éxito: ante la opinión pública estadounidense, el salvadoreño es un problema superado e incluso un ejemplo satisfactorio de lo que la política del gobierno de Reagan pretende conseguir en Centroamérica. Por supuesto, se acepta que aún quedan algunas cuestiones pendientes, pero ya sólo sería necesario seguir suministrando ayuda, económica y militar, por un tiempo más y garantizar que todo siga caminando en la misma dirección.

Por desgracia, el pueblo salvadoreño sabe bien y, sobre todo, experimenta en carne propia que esa imagen positiva no es más que una imagen ideologizada, una distorsión interesada de la realidad. El problema de El Salvador, que es la guerra civil, en lugar de estar en vías de solución, se ha enconado, y las raíces últimas de ese problema, que son las condiciones de injusticia estructural, en lugar de paliarse, se han agravado. Esto no quiere decir que todo haya sido negativo en 1985 o que todos los aspectos de la realidad nacional se hayan deteriorado; lo que significa es que, a pesar de avances o mejoras sectoriales, El Salvador como pueblo y como nación se encuentra a finales de 1985 en una situación claramente peor que a finales de 1984. Lo grave es que, de no darse cambios drásticos en la dirección de los procesos, a finales de 1986 habrá que decir que la situación de 1985 era aún menos negativa. Y es que el país no se está encaminando a la paz ni a la democracia ni a la justicia, sino simplemente a una prolongación indefinida de la guerra. Lo cual puede resultar suficiente para un gobierno extranjero, que logra así mantener bajo control una hipotética amenaza contra su seguridad en el

Las exigencias de la confrontación bélica o el temor de que la causa insurgente pueda volver a contar con el apoyo generalizado de sindicatos y organizaciones populares mantiene viva la llama de la represión.

área a un costo relativamente bajo; pero resulta inaceptable de todo punto de vista para un pueblo a quien se le sigue exigiendo una altísima cuota de sufrimiento y sangre, mientras se le niega de hecho la posibilidad de resolver sus propios problemas.

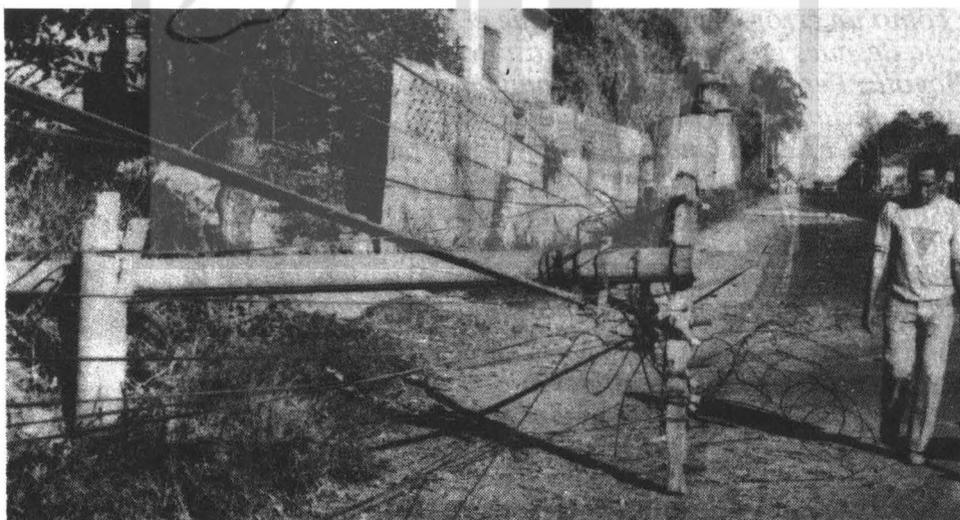
Todavía a comienzos de 1985 se abrigaban esperanzas de que el actual gobierno cumpliera las promesas hechas al electorado y se encaminara seriamente hacia la paz, tanto en el frente militar como en el frente sociopolítico. El importante voto recibido en las elecciones de marzo y que dió mayoría a la democracia cristiana en la asamblea legislativa, ponía en las manos del partido gobernante el poder para intentar seriamente avanzar hacia los objetivos de paz y justicia social con los cuales se había comprometido. En un primer momento, la paz requería entrar en diálogo con los insurgentes para poner fin a las acciones bélicas mientras se lograban acuerdos de fondo que permitieran arremeter con la reconstrucción paulatina del país sobre bases económicas, políticas y sociales nuevas. Nada de esto se ha hecho. Por el contrario; con disculpas triviales, unas veces, con el silencio, otras, se ha descartado el diálogo como vía hacia la paz. Y una vez descartado el diálogo, sólo queda una alternativa: la militar. Es ahí donde tanto el gobierno como su omnipresente "padrino" han puesto lo mejor de su esfuerzo y lo principal de sus recursos. Por ello, en 1985 en El Salvador ha habido "más" guerra que en 1984, aunque es de temer que habrá habido menos que la que se puede prever para 1986.

Se dice que en 1985 la Fuerza Armada ha tenido la iniciativa y que el FMLN se encuentra en franco retroceso y hasta con síntomas iniciales de desintegración. Una vez más, los hechos contradicen este periódico diagnóstico norteamericano, que más parece producto de un pensar interesado (wishful thinking) que de una ponderación objetiva de las realidades. Que la Fuerza Armada ha progresado en 1985 es indudable: el número de sus efectivos ha aumentado, cuenta con mejor armamento, ha logrado mayor operatividad. Pero ello no es más que una cara de la moneda. La otra cara es que también el FMLN ha progresado: ha consolidado su nueva estrategia contrarrestando la guerra aérea, parece haber resuelto sus dificultades logísticas y ha logrado ampliar su campo de acción a otras partes de la república. Es claro que la Fuerza Armada tiene la capacidad de compensar con creces las bajas que le ocasiona la "guerra de desgaste" del FMLN; pero el ataque a las instalaciones del CEM-FA o el creciente número de acciones insurgentes en el occidente del país prueba que los operativos constantes de la Fuerza Ar-

mada no han debilitado militarmente al FMLN. Todos los indicios apuntan a que ambos contendientes confían en su fuerza militar de cara al futuro. Lo cual se traduce en la conclusión de que, de no mediar otras instancias, al pueblo salvadoreño le espera más y más guerra.

Como decíamos en nuestro editorial a comienzos de año, no podía “esperarse para 1985 un fin de las hostilidades;” pero señalábamos allí “seis objetivos inexcusables que deberían proponerse como urgentes tanto los poderes del Estado como el resto de las fuerzas sociales y políticas del país.” Estos seis objetivos eran: (1) la humanización de la guerra, (2) una mejora sustancial de los derechos humanos, (3) la reactivación de la economía nacional, (4) una atención especial a los desplazados, (5) la recuperación de la soberanía nacional, y (6) avances serios en el diálogo nacional. Pues bien, al término de 1985 lo menos que se puede decir es que no se ha logrado ningún progreso importante en ninguno de esos objetivos y, lo que es peor, en varios de ellos se han experimentado significativos retrocesos.

El escalamiento bélico es el principal obstáculo para cualquier forma de reactivación económica: la guerra se come la parte del león de los recursos nacionales y de las ayudas internacionales, pero, sobre todo, la guerra hace inútiles los mejores esfuerzos a los proyectos más brillantes. Se habla oficialmente de un índice de crecimiento económico de 1.5 en 1985, y es claro que algunas empresas y hasta pequeños sectores están obteniendo en la presente coyuntura unos beneficios sólo explicables a la luz del dinero que tan abundantemente fluyen para tareas de destrucción. Pero las ramas no deben impedir ver el bosque del abrumador deterioro económico que aflige al país y que como siempre, se ceba sobre todo en los sectores más humildes de la población: el déficit fiscal llega a los 700 millones de colones, la deuda externa alcanza los cinco mil millones de colones y la in-



versión no sólo no ha aumentado, sino que ha tendido a descender, lo cual está repercutiendo en un incremento acelerado del ejército de desempleados, actualmente estimable en no menos de uno de cada dos salvadoreños en edad de trabajar. Por eso, 1985 ha terminado con la amenaza pendiente de un "paquete" de medidas económicas y fiscales, incluida alguna forma de devaluación de la moneda y de "impuesto de guerra." Es decir, también en lo económico 1985 ha terminado peor que 1984, aunque 1986 se anuncia todavía más negativo.

Ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas, en 1985 se ha observado un intenso, aunque todavía limitado, resurgimiento de la actividad sindical y de la movilización popular. A lo largo de este año y superando el miedo a la represión, los obreros han vuelto a recurrir al paro y a la huelga como instrumentos para paliar un poco lo angustioso de su situación. Es importante reconocer que esa superación del miedo ha resultado en parte posible por la disminución del terrorismo generalizado hacia toda forma de disensión o protesta, lo cual constituye uno de los pocos logros de la actual administración o de sus patrocinadores; pero son las propias condiciones de vida el resorte último que impulsa al obrero o al empleado salvadoreño a irse a la huelga, sabedor de que arriesga "colorearse" y sufrir las consecuencias del terrorismo selectivo y especializado que siguen practicando sistemáticamente los órganos estatales o paraestatales. Esta reactivación de la vida sindical y de la movilización popular debería ser valorada positivamente por un gobierno que trazó como uno de sus objetivos la participación de todos los sectores y que logró llegar al poder gracias a un generoso voto de los sectores populares. Por desdicha no ha sido así; y aunque la respuesta no ha sido tan brutal como lo fuera en períodos anteriores, son numerosos los líderes sindicales hostigados y despedidos, cuando no apresados, torturados y hasta asesinados. Ni siquiera el vergonzoso asalto militar al Seguro Social puede considerarse como un error accidental, ya que el propio presidente lo justificaría después comparándolo al asalto del palacio de justicia en Bogotá. Pero lo peor es el tratamiento sistemático concedido a todo reclamo o protesta popular, como si se tratara de operaciones del FMLN. Claro que el FMLN apoya y promueve la reactivación sindical; pero atribuir a los insurgentes la causa del malestar popular es tan miope como tildar de comunista todo anhelo de justicia social. Y de eso los gobernantes democristianos deberían saber mucho más por propia experiencia que lo que están demostrando con su comportamiento actual en el poder.

Las exigencias de la confrontación bélica o el temor de que la causa insurgente pueda volver a contar con el apoyo general-

El Salvador 1985: peor que 1984, mejor que 1986.



zado de sindicatos y organizaciones populares mantiene viva la llama de la represión. En repetidas ocasiones se ha podido comprobar a lo largo de 1985 que una buena parte de los bombardeos que realiza la Fuerza Armada, tanto desde aire como desde tierra, recaen sobre la población civil, sus viviendas y cultivos. El último de estos bombardeos tuvo lugar el propio día de navidad cuando, según compromiso público del gobierno, el ejército debería haber suspendido todo tipo de operaciones ofensivas para permitir a la población celebrar tranquilamente las festividades de fin de año. Pero no son sólo los bombardeos las únicas formas de violaciones a los derechos humanos que se siguen dando en El Salvador. Junto a los bombardeos, las fuerzas gubernamentales han hostigado y maltratado sistemáticamente a las poblaciones que se encuentran viviendo en zonas conflictivas donde operan los insurgentes, han bloqueado el paso de alimentos, medicinas y cualquier otro tipo de suministros para ellas, y hasta han tratado de atemorizar e impedir la labor de aquellas instituciones humanitarias independientes que pretenden operar en esas zonas más conflictivas y necesitadas. Todos estos puntos serían verificados personalmente y denunciados por Monseñor Rivera en una homilía tenida durante su visita pastoral a Chalatenango en los primeros días de 1986. Han seguido también los casos de detenciones y tortura, algunas tan vergonzosas como las de los hijos de un sindicalista (los hermanos Centeno), encaminada a justificar la postura gubernamental frente a una huelga sindical; y han continuado, también, los asesinatos y desapariciones. Ciertamente, han disminuido los números de la represión, y ello es de alabar; sin embargo, las cifras mortales se mantienen todavía a niveles intolerables desde cualquier punto de vista, muy superiores a los que justificaron en 1979 el golpe de Estado militar, y sin que se observe un cambio

de fondo frente a los responsables, que siguen sin ser sometidos a la justicia. Todo ello apunta a que las modificaciones, tanto las mejoras como los deterioros, son simples conveniencias tácticas, y no cambios sustanciales. De ahí que tanto las Naciones Unidas como la OEA, así como otros varios organismos internacionales hayan vuelto a condenar la violación de los derechos humanos en El Salvador en 1985 y hayan lamentado que, tras un comienzo esperanzador, el actual gobierno esté volviendo a las prácticas de siempre.

En el fondo, 1985 parece estar demostrando que el gobierno de Duarte carece de un poder mínimo como para llevar adelante aquellos objetivos con los cuales pudo conseguir un significativo apoyo electoral. El poder, quizás no único, pero sí el más importante con que cuenta Duarte para desarrollar su labor es el que le proporciona el apoyo del gobierno de Reagan y, en función de ese apoyo, ciertos sectores de la Fuerza Armada. Eso hace que Duarte se encuentre prácticamente maniatado para todo aquello que no responda fielmente a los intereses norteamericanos y a su proyecto hacia El Salvador. Pero los intereses norteamericanos no tienen por qué coincidir en principio con los intereses del pueblo salvadoreño, ni la obtención de su "seguridad nacional" pasa por la justicia que se debe a las mayorías de nuestro país. Por eso, parecería que la imagen que se ha tratado de vender corresponde precisamente al "talón de Aquiles" del presente gobierno: se trata de "un gobierno que no gobierna," sino a lo más administra o ejecuta un proyecto ajeno. El que disponga de unos grados de autonomía, sobre todo para decisiones de poca importancia, no invalida esta afirmación, sobre todo cuando en lugar de utilizar e incrementar esa autonomía relativa, se sigue pignorando sin consideración a las necesidades e intereses del propio pueblo.



En 1985 en El Salvador ha habido “más” guerra que en 1984, aunque es de temer que habrá habido menos que la que se puede prever para 1986.

La impotencia de Duarte quedó bien de manifiesto durante las negociaciones para liberar a su hija. Si algún poder tenía Duarte, en esos momentos tuvo que hipotecarlo tanto para lograr el visto bueno de una Fuerza Armada que le pedía actuar como comandante en jefe y no como padre, y la aquiescencia de los partidos y fuerzas de derecha, que le exigían responder desde las obligaciones de la presidencia de la república y no del amor paternal. Incluso al interior de su propio partido, la democracia cristiana, las negociaciones produjeron una reacción de franco rechazo, ya que Duarte hacía por su hija lo que no había hecho por casi una treintena de correligionarios, también en poder del FMLN. Un mes y medio de tensas negociaciones dejó a Duarte y a su gobierno más inermes que nunca, teniendo que agradecer al embajador norteamericano el que no se hubiera materializado un golpe de Estado técnico. Desde ese momento, el gobierno se ha visto obligado a mostrar una postura todavía más derechista e intransigente, llegando incluso a identificar públicamente su causa con la de aquellas fuerzas a las que la democracia cristiana siempre había acusado de ser las causantes de los males del país. Y si a los pocos días de la liberación de su hija Duarte tuvo que ir una vez más a Washington, a agradecer el apoyo norteamericano y a justificar su negociación con “terroristas,” a final de año tuvo que pasar por la humillación de que los comandantes de algunas de las guarniciones más importantes del país declararan no saber nada de la orden dada por el gobierno para que cesaran los operativos ofensivos durante los días navideños, poniendo así en evidencia su falta de control sobre la Fuerza Armada.

Pero si el gobierno no gobierna, es difícil pensar que esté haciendo algo más que proporcionar el maquillaje necesario para que el proyecto norteamericano hacia El Salvador resulte aceptable a la comunidad internacional y nacional. No es casual a este respecto el que la propaganda oficial haya sido elevada a la categoría de ministerio, con la creación del ministerio de cultura y comunicación. Lamentablemente, no se ven hechos que muestren que el actual gobierno esté cumpliendo más tarea con eficiencia que la de ofrecer una cobertura democrática al desarrollo de la guerra de contrainsurgencia. En esto, como en tantas otras cosas, dónde se pone el dinero indica dónde está si no el corazón, al menos el interés; y si la mitad del presupuesto nacional y la mayor parte de la ayuda internacional se ponen en la guerra, es porque la guerra sigue siendo la prioridad fundamental. A El Salvador y al pueblo salvadoreño se le sigue recetando más guerra y no paz. Por ello, 1985 fue un año peor que 1984, aunque probablemente habrá sido mejor de lo que será 1986.